



BOLIVIA: AJUSTES DE CUENTAS CON 2019; BATALLAS POLÍTICAS HACIA 2025

Pablo Stefanoni*

13 de enero de 2023

Resumen

La captura y encarcelamiento de Luis Fernando Camacho ha devuelto a Bolivia a la crispación política y mantiene vivos los sucesos de 2019, cuando el presidente Evo Morales fue derrocado en medio de una profunda crisis política. Esta medida, tomada por la Fiscalía de La Paz, no es ajena a la decisión del gobierno de avanzar con los casos judiciales “Golpe I” y “Golpe II” que ya han llevado a la cárcel a jefes militares y policiales y a la expresidenta interina Jeanine Áñez. Y tampoco es extraña a las disputas en el interior del MAS entre arcistas y evistas con vistas, ya, a las elecciones del Bicentenario en 2025.

Introducción

La detención del gobernador de Santa Cruz en un operativo comando de la policía en plena calle y su inmediato traslado a La Paz ha tenido un gran impacto en la política boliviana: el acto de fuerza desde el gobierno central actualiza el largo enfrentamiento regional entre las “dos Bolivias”, la occidental andina y la oriental, que tuvo en 2008 uno de los momentos más álgidos. Luis Fernando Camacho, como autoridad regional, es una de las principales figuras de la oposición y su encarcelamiento en el marco del megacaso “Golpe I” se vincula tanto con las luchas gobierno-oposición como con las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), entre el expresidente y presidente del partido, Evo Morales, y

el presidente de la República, Luis Arce Catacora.

Bajo el paraguas del caso “Golpe I”, el gobierno busca juzgar a quienes participaron del derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. Este proceso venía lento, varias audiencias habían sido suspendidas, y daba la impresión de que el gobierno tenía reparos en cruzar ciertas líneas rojas con una autoridad regional elegida con 55% de los votos (del departamento que aporta más de 30% del PIB nacional). Pero eso cambió. La Fiscalía apeló al artículo 226 del Código Penal, “Aprehensión por la Fiscalía”, que dispone que “el fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado”, cuando vea que este “pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad”.

Este caso podría afectar a otras figuras, como los expresidentes Carlos Mesa y

* Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es jefe de Redacción de la revista *Nueva Sociedad* e investigador asociado de la Fundación Carolina.

Jorge “Tuto” Quiroga ya que involucraría a todos aquellos que hayan participado en “reuniones y acciones, entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, con la finalidad de generar desestabilización social y política para deponer autoridades”, y ambas exautoridades participaron en encuentros en los que se decidió cómo reemplazar a Morales tras su renuncia. Por eso se trata de una verdadera espada de Damocles sobre la oposición.

El otro proceso vinculado a los hechos de 2019, llamado “Golpe II” ya llevó a la cárcel a la expresidenta interina Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión. Como para juzgarla por delitos cometidos durante su gestión se debía recurrir a un juicio de responsabilidades con el aval de dos tercios del Congreso, que el MAS no tiene, se decidió juzgarla por haber ocupado ilegalmente el gobierno (es decir, no por lo que hizo como presidenta sino por lo que hizo para llegar a ser presidenta). Por ello, quedaron fuera de la sentencia hechos como las denominadas masacres de Sacaba y Senkata, que provocaron la muerte de más de 30 personas tras la asunción de Áñez. Pero el problema de fondo es que la Justicia es uno de los poderes más deslegitimados en Bolivia, y pocos creen en su independencia y honestidad. Prueba de ello es que cuando cayó Evo Morales fue procesado por sedición y terrorismo, y una semana después del triunfo del MAS en 2020, la misma justicia anulaba todas las causas.

Tras conocerse la noticia de la detención de Camacho, grupos de seguidores ocuparon el aeropuerto de Viru Viru e incluso invadieron aviones donde suponían que podía estar el gobernador. Y en ese inten-

to de levantamiento general, también fueron quemadas las oficinas de la Fiscalía de Santa Cruz.

Evistas vs. arcistas

La orden de detención data del 31 de octubre y fue ejecutada el 28 de diciembre. Con el encarcelamiento de Camacho, Arce neutraliza las acusaciones del evismo de que su gobierno es demasiado condescendiente con “la derecha” y se coloca en el lugar de un político audaz —alejado de la imagen de tecnócrata con la cual se lo asoció durante muchos años— capaz de jugar en el límite. Arce también busca llegar al núcleo duro del MAS, alineado con Morales, en cuyas filas se suele pedir dureza contra los “golpistas”. De hecho, la detención de Camacho descolocó parcialmente al sector evista. “Cuidado que la detención de Camacho sea solo sea una distracción, a mí me sorprende eso. Se sospecha que es una distracción”, declaró el expresidente y reclamó 30 años “por genocidio” para los autores materiales e intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata. Paso seguido pidió cambios en el gabinete: “A nuestro hermano presidente (Luis Arce), para mejorar la gestión pública (le pedimos que) mejore su gabinete (...) ¿Cuántos que estuvieron en el golpe de Estado ahora están en función pública?”, arengó en una crítica abierta al gobierno (*Página 7*, 2022).

La decisión de que fuera Arce el sucesor de Evo Morales se tomó en el exilio de Buenos Aires en un contexto particular: con el expresidente fuera del poder, quien tenía amplias posibilidades de ser elegido por las bases era David Choquehuanca, una figura por años muy cercana a Morales —se conocieron en los años ochenta—



pero excluida del poder en 2017, tras ejercer como canciller desde 2006. Morales rechazó de plano su candidatura (siendo un indígena como él, en caso de ganar podía acabar por desplazarlo política y simbólicamente). La postulación de Arce, un candidato de la élite “blancoide” y sin base social propia, le permitió neutralizar la candidatura de Choquehuanca y al mismo tiempo llevar un candidato competitivo: en medio del desastre económico provocado por la pandemia y por la ineficiencia propia del gobierno “interino” de Jeanine Áñez, Arce podía reclamar para sí el “milagro económico” de los 14 años de gobierno del MAS, con un crecimiento económico sostenido, baja inflación, estabilidad cambiaria y reducción de la pobreza. Empero, el excanciller no fue excluido por completo para no poner en riesgo la unidad partidaria, por lo que se constituyó el binomio de compromiso Arce-Choquehuanca. El MAS pareció recuperar la mística de antaño y en condiciones de adversidad logró movilizar diversas maquinarias políticas y sindicales, y vencer al expresidente Carlos Mesa en diciembre de 2020, tras la decisión de Áñez de convocar a elecciones presionada por las calles.

Tras la victoria electoral, Morales regresó al país por el paso fronterizo de La Quiaca de manera triunfal y muchos se preguntaron cuánto tardarían en producirse cortocircuitos con Arce, y cuánto toleraría el aún líder de los campesinos cocaleros no ser él quien dirigiera las riendas del país. Ya desde Buenos Aires, Morales experimentó una erosión de su liderazgo: el MAS se dividió de facto entre el exilio radicalizado y una deriva más pragmática de quienes se quedaron en Bolivia, sobre

todo de los parlamentarios que controlaban dos tercios del Congreso y reconocieron en los hechos a la presidenta interina. Incluso Eva Copa, elegida presidenta del Senado y militante del MAS, apareció en una foto con Áñez tras el acuerdo para la convocatoria a elecciones para diciembre de 2020 percibido como una instancia de pacificación en un contexto de fuerte convulsión política y social.

En efecto, tras el regreso al poder del MAS, las tensiones internas no tardaron en emerger: primero los evistas se quejaban *sotto voce* de que los arcistas los iban excluyendo del poder (el gabinete de Arce no incluyó a ninguno de los pesos pesados de la era Evo), pero más tarde las disputas internas se volvieron públicas y a viva voz. El expresidente llegó a denunciar, en septiembre de 2022, un “plan negro” de sectores del gobierno de Arce para sacarlo del juego político apelando a intrigas político-judiciales.

“Los ministros de Gobierno y de Justicia se han molestado porque las bases dijeron que Evo sea candidato del Bicentenario; por eso, ellos armaron el plan negro contra nuestro líder”, dijo en septiembre pasado el vicepresidente del MAS, Gerardo García, en una conferencia de prensa. Dicho “plan”, según García, consistiría en involucrar a Morales con hechos de narcotráfico. El propio Morales aseveró que miembros del gobierno habían contratado a “guerreros digitales” para atacarlo a través de las redes sociales. Excluyendo en su comienzo a Arce de sus críticas, el expresidente señaló que “para justificar y disimular su pacto con la derecha, los renovadores traidores [dentro del go-



bierno] acusan al MAS-IPSP¹ de buscar el acortamiento de mandato [de Arce]”. Uno de los principales destinatarios de las críticas de Moras suele ser el ministro de Gobierno (interior) Eduardo del Castillo, uno de los funcionarios más importantes del gobierno actual.

El choquehuanquismo, por su parte, que es aliado por conveniencia de Arce, utiliza el discurso de la “renovación” en la lucha de fracciones. Choquehuanca no tiene un discurso ideológico preciso, suele apelar a imágenes “pachamámicas” y es bastante pragmático en la política cotidiana. Si bien tiene influencia en una parte del MAS, sigue ocupando un espacio minoritario. En el caso de Arce, aunque tiene poca fuerza propia entre las bases, cuenta con el peso que le da el ejercicio de la presidencia, que busca utilizar para ser candidato en 2025. Si bien inicialmente dijo que no buscaría la reelección, por motivos de salud, eso parece haber quedado atrás y el encono de Morales contra él se vincula en gran medida con el hecho de ver en el actual presidente a un adversario de peso, en un contexto en el cual si el MAS va unido tiene grandes posibilidades de victoria, pero si se divide y pierde caería sobre él la misma justicia que cae hoy sobre los “golpistas”.

Aun cuando el MAS regresó al poder en 2020, Morales resiente que él quedara, en su opinión injustamente, fuera del Palacio tras 14 años que lo volvieron el presidente con más tiempo en el poder en la historia boliviana. Por eso, hoy busca de manera abierta ser el presidente del Bicentenario,

¹ Nombre oficial del partido: Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

que se celebrará el mismo año de las próximas elecciones (2025). En la actualidad combina su papel de presidente del MAS y de las seis federaciones cocaleras con algunos emprendimientos comerciales como la cría de tambaquís —un pez de su región— y mantiene una emisión en Kawsachun Coca, la radio de los sindicatos cocaleros que emite desde la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Arce no sale a polemizar con el expresidente, pero autoriza a sus colaboradores a hacerlo.

¿Por qué ahora?

El momento elegido para la detención de Camacho no parece azaroso. Además de la escalada de las disputas internas en el MAS, Santa Cruz viene de más de un mes de paro en favor de la realización del censo de población en 2023 —en lugar de 2024— que ha debilitado sus fuerzas. El gobernador Camacho, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, mantuvieron un paro que duró 36 días y terminó en una derrota a medias: el gobierno finalmente fijó la fecha del censo para 2024, pero mediante una ley consensuada y no mediante decreto.

La cuestión del relevamiento poblacional es muy importante en Bolivia ya que con los nuevos datos se redefine la asignación de recursos para los diferentes niveles de gobierno regionales y se redistribuye la cantidad de escaños entre las regiones (Santa Cruz es una zona que recibe numerosos migrantes internos y crece en población), lo que en un país con una política regionalizada como la boliviana puede alterar la correlación de fuerzas partida-

rias e ideológicas. Esta es siempre una fuente de crispación: en 2005, las elecciones presidenciales debieron ser postergadas por los conflictos por la reasignación de escaños —que incluyeron masivos bloqueos de rutas— en función del censo de 2001. Y también hubo polémica con el de 2012 porque se acusó al gobierno de tratar de beneficiar a las regiones oficialistas. Esta vez la discusión es sobre el censo que debía realizarse en 2022 y fue postergado: la susceptibilidad se vincula con la duda sobre si los resultados censales finales estarán disponibles con suficiente antelación para modificar la distribución de los escaños electorales en las elecciones generales de 2025, además de la redistribución de recursos financieros.

El paro por el censo volvió a tensionar las relaciones entre La Paz y Santa Cruz, en un país en el que la “lucha de regiones” explica gran parte de la conflictividad política. El 9 de diciembre, Camacho había desafiado abiertamente a los fiscales paceños ante a la posibilidad de que lo citaran a La Paz para que declarara en relación con el paro regional: “Cuando yo decidí ir de gobernador no fue para ganar un sueldo o para enriquecerme como ellos, fue para morir defendiendo a mi pueblo. Si a mí me quieren meter preso que vengan a mi pueblo y me alcen de mi pueblo. Yo no voy a ir a [La Paz a] entregarme al masismo como ellos quieren”. Finalmente, eso fue lo que ocurrió, ante la sorpresa general y la airada reacción de la oposición, pero en el marco del caso “Golpe I” y acusado de terrorismo.

Dos Bolivias

El movimiento sociopolítico que llevó a Evo Morales a la presidencia fue, en esencia, un proceso operado en el occidente andino y valluno del país. El solapamiento entre discursos nacionalistas revolucionarios e indianistas, que colocó a Bolivia en la órbita de la “marea rosa” latinoamericana, ocurrió en los departamentos occidentales —La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí—. El combustible fue la politización, bajo nuevos marcos y discursos, de la identidad indígena-campesina en el contexto de la crisis de la identidad obrera tradicional, construida a la sombra del auge de la minería estatal, que se marchitó a mediados de los años ochenta.

La Guerra del agua en 2000 y la Guerra del gas en 2003 fueron dos eventos que, con sus expresiones heroicas y con sus mártires, jalonaron el camino para un profundo recambio de élites en el país. Pero la región de Santa Cruz, y más en general el oriente y sur bolivianos (Beni, Pando y Tarija), quedaron parcialmente al margen de este proceso de reconfiguración político-ideológico: por un lado, la élite empresarial cruceña, asociada a la economía agroindustrial, mantuvo su poder y su hegemonía ideológica sobre esta parte del país, centrada en un discurso que contraponía modernidad (Santa Cruz) vs. atraso (Bolivia andina); por el otro, y asociado con lo primero, el neoliberalismo no sufrió en esta región una crisis de legitimidad de las dimensiones que tuvo en el occidente del país.

Pero hay otro elemento: la denominada “emergencia indígena” en el occidente andino reforzó la identidad cruceña (cam-



ba) como lo opuesto a lo “colla”. La crisis de octubre de 2003 (Guerra del gas), que provocó la caída y huida del país del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y se transformó en el acontecimiento mítico del “proceso de cambio”, tuvo una lectura alternativa en Santa Cruz: el espejo no devolvió una imagen de lucha revolucionaria en favor de una deseable refundación de Bolivia en clave nacional-popular, sino que el “espejo, labrado por el Comité Pro Santa Cruz y otros grupos de poder, nos propuso primero un octubre de caos y avasallamiento que amenazaba a Santa Cruz y a la forma de ser de nosotros, los cruceños”, escribió la investigadora y política Claudia Peña Claros en un artículo titulado “Ser cruceño en octubre y los desafíos de la identidad” (Peña Claros, 2006). Las imágenes contrapuestas eran múltiples: Bolivia como encarnación del pasado / Santa Cruz como encarnación del futuro; empuje emprendedor-empresarial / dependencia del Estado; cultura del trabajo / conflicto permanente; libertad de empresa / capitalismo de Estado... Frente a este “Estado fracasado” de base andina, el Comité Pro Santa Cruz propuso la “autodeterminación de los pueblos” sobre la base de unas autonomías regionales que dejaran atrás el Estado unitario heredado de la independencia.

El Comité Cívico como institución que galvaniza la identidad cruceña es clave para entender la dinámica política regional: el Comité agrupa a las fuerzas vivas y aunque están representados también la central obrera local, además de universidades o fraternidades folklóricas, la hegemonía la tienen los gremios empresariales, e históricamente sus posiciones han sido reactivas a los gobiernos nacionalis-

tas y de izquierda. Si bien en toda Bolivia hay comités cívicos, solo en Santa Cruz tiene un papel tan central en la vida política y la identidad locales. Mientras que desde La Paz se atribuye el crecimiento de esta región, desde los años cincuenta, a diversos planes de desarrollo, desde Santa Cruz se pone el acento en la autoconstrucción cruceña *a pesar* del “andinocentrismo” dominante. Pero, con todo, las expresiones políticas e intelectuales secesionistas siempre fueron marginales y, al fin de cuentas, se trata de dos visiones sobre qué debería ser Bolivia en su conjunto. En los años 2000, el más tarde vicepresidente Álvaro García Linera habló de un “empate catastrófico” entre dos bloques político-regionales contrapuestos y la necesidad de superarlo mediante la nueva Constitución como un nuevo pacto de convivencia que reconociera las nuevas relaciones de fuerza en el país y tratara de articularlas.

Pese a todo esto, Evo Morales hizo una buena elección en esa región en 2005: mientras que a escala nacional obtuvo un 54% de los votos, en el departamento de Santa Cruz llegó a 33% en gran medida gracias a los procesos migratorios, que hacían que hubiera muchos votos quechuas y aymaras disponibles, además de los votos “cambas” que el MAS pudo sumar, sobre todo en el campo y las regiones periurbanas que rodean a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero eso no evitó que en esa región se concentrara el poder de fuego más fuerte de la oposición contra el “proceso de cambio”. Las tensiones que habían comenzado con el presidente Carlos Mesa (2003-2005), en la lucha por autonomías regionales, estallaría en 2008 en un amplio movimiento de



la denominada “media luna”, en referencia a la forma geográfica de la región que aglutina a los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (con Chuquisaca como integrante más inestable de esta constelación ideológico-regional).

Recuperando imaginarios presentes en Bolivia durante todo el siglo XX, e incluso antes, el gobierno de Morales hizo rimir rápidamente autonomía con secesionismo, y los apellidos croatas de algunos de los dirigentes cruceños sirvieron para lanzar acusaciones de que buscaban “hacer lo mismo que en Yugoslavia”. Con gobernadores opositores elegidos por voto popular (desde 2004), la “media luna” lanzó en 2008 una ofensiva contra La Paz para conseguir su autonomía, que incluyó referendos ilegales considerados por el gobierno un intento de golpe de Estado “cívico-prefectural”². Esa crisis tuvo proyección regional y concitó una enérgica respuesta de los países vecinos, temerosos de una deriva secesionista. Bajo la presidencia pro t mpore de Chile, presidido por Michelle Bachelet, la Uni n de Naciones Suramericanas (Unasur) adopt  la “Declaraci n de La Moneda”, en la que se rechazaba “cualquier situaci n que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la Rep blica de Bolivia”.

El resultado de la batalla pol tica entre el gobierno del MAS y la dirigencia cruce a, que tuvo contornos violentos, fue ambivalente: por un lado, la media luna logr  que se incluyeran las autonom as (aunque con menos competencias que las

que deseaban) en la nueva Constituci n de 2009, pero aun as  las  lites orientales sufrieron una derrota pol tica. El gobernador del departamento amaz nico de Pando, Leopoldo Fern ndez, el eslab n d bil de la media luna, fue encarcelado, acusado por una masacre cometida en su regi n contra campesinos progobierno. Fue un mensaje al resto. Evo Morales, a su vez, revalid  su poder en un refer ndum revocatorio realizado en 2008, con m s del 67% de los votos en favor de su continuidad, y fue h bil para pactar con los empresarios, que quer an aprovechar el boom econ mico, y aislar a la oposici n pol tica.

En 2014, con la macroeconom a en alza, y un proceso de “despolarizaci n” en marcha (Molina, 2014), Evo Morales obtuvo en las elecciones de ese a o 61% en el conjunto del pa s, y un notable 49%, y primer lugar, en la esquivada Santa Cruz. El “milagro econ mico” —con el actual presidente Luis Arce como ministro— hab a logrado un milagro pol tico: si bien el gobierno regional siempre estar a en manos de la oposici n, la mayor a presidencial del MAS en esa suerte de “territorio enemigo” parec a sellar la unidad nacional. Pero la luna de miel dur  poco y fue quebrada por los intentos reeleccionistas de Evo Morales.

En febrero de 2016, Morales convoc  un refer ndum para incluir la reelecci n indefinida en la nueva constituci n y perdi  por muy escaso margen. Entonces se dedic  a buscar v as legales alternativas para lograr de todos modos su repostulaci n, lo que crisp  no solo la pol tica nacional sino la local en los siguientes a os. Una nueva generaci n, portadora de un

² En ese entonces, las gobernaciones se llamaban a n prefecturas.

discurso radical, cuestionó la supuesta tibieza del gobernador y la dirigencia local frente al gobierno central y disputó el Comité Cívico: una de las caras visibles de esa movida era Luis Fernando Camacho. Con su victoria para presidir esa institución en febrero de 2019 prometía retomar el combate contra el gobierno nacional y contra el “masismo”.

El periodista cruceño Pablo Ortiz describió a Camacho como “el que tomaba la voz de los jóvenes más radicalizados [del Comité Cívico], a punto tal de entrar pateando la puerta y obligar a convocar a un paro cívico contra Evo Morales que los líderes del Comité de ese momento no querían impulsar”. Y añade: “Hay que recordar que los gremios empresariales cruceños se entendieron muy bien con Morales, sobre todo después de 2010. Camacho volvió a posicionar al Comité como la principal cabeza de la oposición regional contra el gobierno del MAS. Desde ahí llegó a ocupar su presidencia y fue midiendo cada paso hasta que encontró su momento [...] Camacho creció al galope del discurso populista antiestablishment por un lado, y por el otro, con una retórica que enfatiza que él es el ‘verdadero representante’ de Santa Cruz” (Stefanoni, 2020).

Su momento llegaría con la crisis político-electoral de 2019, que le permitió saltar fugaz pero efectivamente, al escenario nacional. Tras meses de insistir con la consigna “No es no”, en referencia al resultado del referéndum de 2016, la oposición venía cuestionando la legalidad de la candidatura de Evo Morales, y las denuncias de fraude tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese

año potenciaron las movilizaciones, que tenían como escenario principal el monumento al Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Camacho tuvo un rol importante en la caída de Morales, en medio de un amotinamiento policial en todo el país. Incluso presumiría más tarde frente a otros dirigentes cruceños de que su papá había sido el encargado de negociar con los policías el amotinamiento (lo que hoy es usado en su contra por los fiscales)³. En una jugada arriesgada, el dirigente cruceño viajó a La Paz para llevar una “carta de renuncia” para que Evo Morales “la firmara”. “No estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza; con una Biblia en la mano derecha y su carta de renuncia en mi mano izquierda”, declaró entonces, mientras incorporaba un tono religioso a sus discursos.

En una ciudad históricamente reticente hacia lo “camba”, el antievismo paceño recibió a Camacho como un líder y, tras la caída de Morales, recorrería La Paz, como un héroe, junto a los policías amotinados en uno de los coches policiales. Pero su popularidad paceña duró poco. Su popularidad en los sectores acomodados paceños se basaba más en ser, en ese entonces, el anti-Evo que en ser Camacho. En 2020 postuló a la presidencia: obtuvo un 14% en el nivel nacional y menos de 1% en La Paz.

Golpe o fraude

Desde el regreso al poder del MAS, con sorpresivo 55% en las elecciones de noviembre de 2020, Evo Morales ha busca-

³ Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4uuiF0_8N4E.

do instalar, a cal y canto, que en 2019 hubo un golpe de Estado. El argumento es que la entonces vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, no estaba en la línea de sucesión y que fue colocada en ella —al ser elegida como presidenta de la Cámara tras la renuncia de Morales— en una sesión sin quórum, en la que no se permitió la llegada de los parlamentarios del MAS, sujetos a diferentes formas de acoso callejero. Desde el MAS se argumenta que el amotinamiento policial, diversas reuniones conspirativas para definir la sucesión y la “sugerencia” militar de que Morales renunciara, configuraron un golpe de Estado, al que siguió la persecución de Morales y sus colaboradores.

Para la oposición, se trataba de llenar el vacío de poder en un contexto en el que habían renunciado, además de Morales, los presidentes de ambas Cámaras (Adriana Salvatierra y Víctor Borda), que sufrieron diversas formas de intimidación como la quema de la casa de Borda⁴. Se señala, a modo de justificación, que los militares pidieron la renuncia del presidente después de que hiciera lo propio la Central Obrera Boliviana (COB) y cuando Morales ya había decidido abandonar el gobierno ante las masivas movilizaciones en las calles; que el Congreso en manos del MAS siguió funcionando bajo el gobierno de Áñez; y *à la limite*, que fue Evo quien realmente dio el (auto)golpe al presentarse a elecciones pese a haber per-

didado el referéndum para modificar la Constitución y habilitar la reelección⁵.

“Fue golpe, no fue fraude”; “fue fraude, no fue golpe”, son las dos consignas enfrentadas que aún hoy reflejan las visiones contrapuestas sobre lo ocurrido en el país en 2019. En ese entonces, la oposición denunció fraude en medio del recuento de votos de la primera vuelta. Otra vez, la crisis se internacionalizó con los informes de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). El 21 de octubre la OEA puso en duda los resultados y le dio combustible a las movilizaciones opositoras que se irían radicalizando. Y el 10 de noviembre, el informe preliminar de los observadores de la organización terminó de inclinar la balanza contra el gobierno, cuando Morales estaba casi sin oxígeno. Allí se decía: “En los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado” (Saltalamacchia, 2020). Este informe terminó siendo un arma letal en manos de quienes abiertamente desde las calles —ya en medio de una ola de violencia opositora— y de manera conspirativa desde espacios cerrados, buscaban derrocar a Morales.

⁴ La nueva Constitución de 2009 excluyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la línea sucesoria, por lo que no era posible apelar a esa opción como en 2005. Hay una discusión sobre si Salvatierra y Borda renunciaron por indicación de Evo Morales para provocar, precisamente, ese vacío de poder.

⁵ Morales fue autorizado a presentarse por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el argumento de que todo ciudadano que no haya perdido sus derechos políticos tiene derecho a elegir y ser elegido en el marco del Pacto de San José de Costa Rica, lo que fue cuestionado por la oposición.



Esta reacción apresurada de la OEA contrastó con la postura inicial de su secretario general, Luis Almagro, ante la legalidad o no de la reelección de Morales: en mayo de 2019, viajó a Bolivia y avaló la reelección. “Decir que Evo Morales hoy no puede participar sería absolutamente discriminatorio” ya que otros presidentes de la región (sobre todo en Centroamérica) fueron habilitados con argumentos similares sin recibir la condena de la OEA, declaró atrayendo sobre sí la ira de la oposición. Pero la cosa no quedó ahí. En su visita, Almagro viajó al bastión del MAS y de los cocaleros: el Chapare, en el Trópico de Cochabamba. Incluso visitó la casa donde vivió Evo, de joven, en Villa Tunari, recorrió plantas industriales y plantaciones de coca, y se lo pudo ver luciendo las guirnaldas de flores con que los campesinos suelen condecorar a los visitantes ilustres. Evo se refirió a él como el “hermano Almagro”. Incluso, en tono de campaña, el jefe de la OEA acompañó al presidente Morales a entregar una cancha de césped sintético en la localidad de Lauca Ñ, donde bailó Salay con las campesinas del MAS. El propio Almagro resumió así su visita en Twitter: “Visité con el presidente @Evoespueblo la región del Chapare, donde vi iniciativas como la fábrica de UREA que demuestra que la industrialización de nuestros recursos naturales es posible en el hemisferio”. La situación se volvió irónica considerando las posiciones de Almagro sobre otros gobiernos “populistas” en la región. El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga (de derecha dura) se sumó a quienes, desde la oposición, denunciaron que Almagro le hacía el juego al MAS y pidieron su salida del país.

Más allá de la discusión fraude/golpe, lo cierto es que el gobierno “interino” de Áñez comenzó con veleidades refundacionales y revanchistas, con persecuciones político-judiciales contra los dirigentes del MAS, la diabolización de todo lo que remitiera al gobierno anterior y la represión en las calles a sus seguidores. Peor aún para el nuevo gobierno, desde el comienzo fue percibido como una “revancha de las élites”, desplazadas real o imaginariamente del poder en 2005. Una especie de “contrarrevolución” (Molina y Stefanoni, 2019). Y, adicionalmente, desde el día uno, muchos de los nuevos funcionarios comenzaron a utilizar al Estado en su propio beneficio, lo cual derrumbó el capital ético del nuevo gobierno, que no se cansaba de denunciar la “corrupción del MAS”⁶.

Áñez tuvo varios frentes, algunos de ellos exógenos como la pandemia de COVID-19, y otros endógenos, como las divisiones internas de la derecha, que rápidamente provocaron la ruptura de un sector conservador con el gobierno, más precisamente el de Camacho. Y la decisión inicial de Áñez de competir en las elecciones presidenciales terminó por dividir al espacio anti-MAS.

En 2019, el “antievismo” buscó trazar su estrategia a partir de un error político fundamental: muchos estaban convencidos de que el MAS había perdido la mayoría y que se volvería más minoritario

⁶ La reciente condena a varios años de cárcel al exministro de Áñez y hombre fuerte de su gobierno, Arturo Murillo, por un tribunal de Estados Unidos, por conspiración para blanquear sobornos, es una buena muestra de la forma en que se gestionó el país en 2019-2020 (Jiménez, 2023).



todavía sin los resortes clientelistas del Estado (un error similar al que cometió el antiperonismo argentino tras el golpe de 1955). La afirmación de que en 2019 había operado un “fraude monumental” no hizo más que alimentar ese espejismo, que desconocía el hecho de que el MAS seguía siendo el principal canal de acceso al Estado para los sectores populares, más aún dadas las muestras de “elitismo” del nuevo gobierno. Basta recordar que una de las manifestaciones más masivas de la era Ñez fue contra lo que se consideró un agravio del “gobierno antiindio” a la Wiphala —bandera indígena de múltiples colores—. La maquinaria del MAS —un partido de sindicatos de trabajadores y pequeños propietarios, y organizaciones sociales (Do Alto, 2011)— se puso en marcha en 2020, volviendo al trabajo de bases parcialmente abandonado por 14 años de “estatización” de las organizaciones, cuyos referentes ocupaban diversos cargos en el Estado o buscaban ocuparlos.

Futuro inmediato

En estos dos últimos años, varios militares fueron encarcelados o se encuentran prófugos: el excomandante de las fuerzas armadas en 2019, Williams Kaliman, se encuentra prófugo, el excomandante de la fuerza aérea, Gonzalo Terceros, se encuentra encarcelado y lo mismo ocurre con numerosos policías y militares. En el caso de Camacho, el ministro de Gobierno ha dicho que se ampliará la querrela por los delitos de cohecho activo (soborno) y seducción de tropas, y manifestó que se habrían encontrado depósitos de dinero a militares desde cuentas del actual gobernador de Santa Cruz.

Habrá que ver si Santa Cruz puede desplegar resistencia significativa en un contexto de cansancio social —y donde los paros terminan perjudicando a su propia dirigencia, de base empresarial— o si la suma de casos judiciales contra Camacho —al que ya se le dictó cuatro meses de prisión preventiva en el penal de Chonchocoro— sacan al gobernador del juego político. Y, más en general, habrá que observar cómo gestiona el gobierno esta situación de crispación política.

Si el regreso del MAS al poder se leyó como la normalización democrática de Bolivia, los avances de los procesos judiciales sobre golpismo pueden volver a polarizar el país y contribuir a que el MAS sea visto otra vez como un partido con voluntad de copar todo el poder y opuesto a la alternancia. La crisis de 2019 y el derrocamiento de Evo Morales se vincula en gran medida al desgaste provocado por la obsesión reeleccionista, que ocupó gran parte de la agenda oficial desde la derrota de 2016. Hoy el MAS es nuevamente un partido con amplio apoyo y la oposición sigue pagando los costos del fracaso del gobierno “transitorio” y eso hace que sectores del oficialismo se sientan seducidos por una vía “iliberal” más pronunciada. La diferencia con el periodo previo, en el que Evo Morales era el líder indiscutible, es que hoy el partido baila a varios ritmos, y la disputa no es solo con la oposición sino fundamentalmente interna, donde reina la desconfianza entre las diferentes facciones “masistas”.



Conclusiones

- La detención del gobernador de Santa Cruz responde a varias razones, vinculadas tanto al conflicto gobierno-oposición como a las disputas en el interior del oficialismo.
- El Movimiento al Socialismo (MAS) regresó al poder en 2020 con Luis Arce como candidato, con el apoyo de Evo Morales, exiliado en Argentina. En este tiempo la relación entre ambos muestra una fuerte erosión.
- Con la detención de Camacho, Arce responde al núcleo duro del MAS, que reclama más energía contra los “golpistas” de 2019, y busca disputarle ese sector a Morales rumbo a las elecciones de 2025.
- Evo Morales se propone ser el presidente del Bicentenario y denuncia que ministros de Arce elaboraron un “plan negro” para sacarlo de juego.
- La región de Santa Cruz, epicentro de la oposición al MAS desde 2006, busca mantener las movilizaciones en defensa de Camacho en un contexto de desgaste social por conflictos recientes en torno a la realización del censo.



Referencias bibliográficas

DO ALTO, H. (2011): “Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano”, *Nueva Sociedad*, nº 234, julio-agosto.

JIMÉNEZ, M. (2023): “Condenado en EE UU a 5 años y 10 meses de cárcel Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia”, *El País*, 5 de enero.

MOLINA, F. y STEFANONI, P. (2019): “¿Cómo derrocaron a Evo?”, *Anfibia*, noviembre.

PÁGINA 7 (2022): “Evo teme que detención de Camacho ‘sea sólo una distracción’”, 30 de diciembre.

PEÑA CLAROS, C. (2006): “Ser cruceño en octubre y los desafíos de la identidad”, *Tinkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, nº 20, junio.

SALTALAMACCHIA, N. (2020): “La OEA en la elección presidencial de Bolivia: problemas de credibilidad”, *Análisis Carolina* nº 13, Madrid, Fundación Carolina.

STEFANONI, P. (2020): “La montaña rusa boliviana. Entrevista a Pablo Ortiz”, *Nueva Sociedad*, nº 290, noviembre-diciembre.

— (2022): “Luis Almagro y Bolivia: la foto y la película”, *elDiarioAR*, 12 de junio.



Fundación Carolina, enero 2023

Fundación Carolina
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8
4ª planta, 28006 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

https://doi.org/10.33960/AC_01.2023

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Inter-
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)